

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por DIECY GIOVANNI JARAMILLO PRADO en contra SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (Radicado 05001-31-05-008-2021-00101-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A., al abogado Jefferson Lozano Jaramillo, con tarjeta profesional No. 224859 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen profesional de manera retroactiva junto con las costas del proceso.

Como fundamento a sus pretensiones, narró que estando afiliado a la ARL Seguros de Vida del Estado S.A. sufrió un accidente de trabajo el 06 de julio (sic) al dispararse su arma de dotación, dejando una herida en su mano izquierda, siendo calificado ese evento por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la que asignó una pérdida de capacidad laboral del

Rdo. 05001-31-05-008-2021-00101-01

29.11% con fecha de estructuración del 06 de diciembre de 2009. Más adelante, ya afiliado a la ARL Sura sufrió un nuevo accidente en diciembre de 2009 calificada la pérdida de capacidad laboral en un 24.7%, cuya sumatoria arroja un total de 53.81 que le permiten acceder a la pensión de invalidez.

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. dio respuesta al libelo en la oportunidad procesal con oposición a las pretensiones, aceptando el accidente de trabajo sufrido el 05 de junio de 2007 sobre el que fue reconocida la respectiva indemnización equivalente en principio a \$6.664.100 ajustada posteriormente en \$2.389.018, y enfatiza en la equivocación del demandante al pretender el reconocimiento de una pensión de invalidez a partir de una simple operación aritmética de diagnósticos y calificaciones aisladas y exclusivas para cada uno de los accidentes con desconocimiento de los parámetros del Manual Único de Calificación, agregando que en todo caso esta aseguradora no está llamada a responder por la prestación toda vez que el señor Jaramillo estuvo afiliado a esta ARL entre el 25 de agosto de 2006 y hasta el 06 de febrero de 2008, fecha en la que la compañía cerró operaciones de comercialización y colocación del ramo ARL. Como excepciones de fondo formuló las que denominó inexistencia del derecho en cabeza del demandante, ausencia de legitimación en la causa por pasiva de Seguros de Vida del Estado S.A., inexistencia de obligación a cargo de Seguros de Vida del Estado S.A y prescripción extintiva.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A - antes ARL SURA- aceptó la afiliación del trabajador por diferentes períodos de cobertura, y que en el año 2009 lo estuvo por cuenta de Aseguradora Record de Colombia, donde el 06 de diciembre de 2009 sufrió el accidente relatado *-caída desde su propia altura-* cuya calificación correspondió al 24.7%, a partir de la que se procedió con el cumplimiento de las obligaciones contractuales de parte de la ARL con reconocimiento una indemnización que ascendió a la suma de \$7.363.058. Se opone a lo pretendido en tanto pregonar que esos pedimentos provienen del desconocimiento de la normatividad aplicable al caso, puesto que el Manual Único de Calificación es el que define los criterios para obtener una calificación integral donde se aplica una suma combinada para obtener el valor de las deficiencias, no resultando correcto realizar una suma de los dictámenes para

Rdo. 05001-31-05-008-2021-00101-01

obtener el porcentaje final de la pérdida de capacidad laboral. Como excepciones de mérito propuso las de imposibilidad de aplicar la sentencia invocada, no cumplimiento de la invalidez necesaria, pago y compensación, buena fe de la ARL Sura y prescripción.

Surtido el trámite de rigor, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín mediante providencia emitida el 22 de febrero de 2021 ABSOLVIÓ a las demandadas de cada una de las pretensiones y CONDENÓ en costas al actor, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

La activa disiente de lo decidido por cuanto insiste en la posibilidad de sumar los dos dictámenes que dictaminaron una PCL de origen profesional, aduciendo que estaban en firme y tienen completa validez, acudiendo al refrán “*quien puede lo más puede lo menos*” para aducir que es posible la sumatoria, lo que se ha permitido en su sentir por ambas Cortes, no existiendo otra manera de determinar la pérdida de capacidad total al tratarse de dos eventos y dos afiliaciones distintas, encontrando ajustado a derecho el reconocimiento del derecho por contar en ese orden con un porcentaje superior al 50% con origen en unos accidentes de trabajo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión en esta sede, la ocurrencia de los accidentes de trabajo sufridos por el actor el 05 de junio de 2007 y el 06 de diciembre de 2009 que le generaron en su orden una pérdida de capacidad laboral del 29.11% (Págs. 67-70 Archivo 11), y del 24.7% (Págs. 9-13 Archivo 02) estructurada para iguales datas de los eventos, catalogados ambos como de origen laboral con el correlativo reconocimiento de la indemnización a cargo de cada ARL (Págs. 54-58 Archivo 11).

Rdo. 05001-31-05-008-2021-00101-01

De cara a lo anterior, y atendiendo los argumentos del recurso, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer la procedencia de sumar los porcentajes resultantes de los dos dictámenes que calificaron la pérdida de capacidad laboral de los accidentes de trabajo padecidos por el actor, que genere la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez de origen laboral.

Pues bien, para resolver es necesario acudir al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por los artículos 52 de la Ley 962 de 2005, 142 del Decreto Ley 019 de 2012 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el cual establece un procedimiento en el sistema de seguridad social para la calificación del origen y la determinación de la condición de invalidez, trámite que tiene como característica que se realiza conforme a los elementos técnicos y científicos definidos en el Manual Único de Calificación de Invalidez que se encuentre vigente al momento de la evaluación, cuya determinación de la pérdida de capacidad laboral debe ser integral, esto es, en la valoración el equipo calificador debe tener en cuenta todas las secuelas y patologías incluidas las anteriores, sean de origen común o laboral de donde surgen los porcentajes de los tres criterios de minusvalía, discapacidad y deficiencia que arrojan finalmente el porcentaje total de pérdida de capacidad laboral.

En ese orden, contrario a lo aseverado por el recurrente, existe la posibilidad de que se determine la pérdida de capacidad laboral de una persona bajo el concepto de calificación integral, donde se deben tener en cuenta todas las secuelas y patologías incluyendo las anteriores con las que cursaba el afiliado, incluso si las mismas son de diferente origen, atendiendo la norma técnica vigente a la fecha de calificación, sin que pueda entenderse en ningún caso que el concepto de integralidad, corresponda a la suma de pérdidas de capacidad laboral independiente del origen o sumatoria de dictámenes, porque en voces de la alta corporación en nuestra especialidad, ello acarrea una violación a la disposición normativa (Ver SL 1987-2019, SL4297-2021 y SL3008-2022).

Debe precisarse que la sentencia C-425 de 2005 no permite tal contrariedad a la norma y a lo que el legislador tiene dispuesto para efectos de determinar la

Rdo. 05001-31-05-008-2021-00101-01

condición de invalidez de una persona, pues lo que de esa providencia se desprende es la imposibilidad de prohibir que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores haciendo valer el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, pero bajo cualquier circunstancia, es de una calificación integral que debe surgir el porcentaje requerido para hacerse acreedor el solicitante de una pensión de invalidez de origen laboral, lo que integra la sumatoria de todas las patologías comunes y laborales que al acumularse mediante sumas ponderadas, permiten determinar a partir de los criterios de discapacidad, minusvalía y deficiencia si el porcentaje de pérdida de capacidad laboral total del afiliado es superior al 50%.

Es así como, el actor debió acudir a una nueva calificación integral donde se consideraran los dos eventos laborales padecidos en los años 2007 y 2009 y si es el caso, poner en consideración las afecciones de tipo común, para definir si a partir de los elementos técnicos y científicos definidos en el Manual Único de Calificación el valorado alcanza un estado de invalidez, pues no de otro modo puede procederse para atribuir esa condición al actor, encontrando desacertado el argumento de la activa, donde la suma de las dos experticias resultan ser un método antitécnico y desconocedor del procedimiento especial plasmado como lenguaje unificado y estandarizado por el Gobierno Nacional para el abordaje de la valoración del daño en un enfoque integral.

A partir de lo previo se derruye el argumento del apelante en cuanto al aval de las altas cortes sobre la posibilidad que busca en este trámite judicial, encontrando de ese modo acertada la decisión absolutoria que se revisa, y que conlleva a que la providencia sea confirmada.

Atendiendo el contenido del artículo 365-3 del CGP, las costas en esta instancia estarán a cargo del actor, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$200.000 para cada demandada.

Rdo. 05001-31-05-008-2021-00101-01




DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** íntegramente la sentencia apelada, de fecha y procedencia conocidas.

Costas de la instancia a cargo de la parte demandante, tal como quedó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Rdo. 05001-31-05-008-2021-00101-01

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500820210010101
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: DIECY GIOVANNI JARAMILLO PRADO
Demandado: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 18/05/2023
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 19/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario